

El cambio político que permitió dejar atrás al sistema de partido hegemónico y establecer otro plural y competitivo, incluyó la construcción de un complejo y peculiar sistema electoral. Eso se logró por la sucesión de diversas reformas políticas y electorales. En este trabajo se estudia, en primer lugar, las lógicas a partir de las cuales se llevaron a cabo esas reformas. Se da cuenta, además, del ataque autocrático que en los últimos años se ha dirigido en contra del sistema electoral mexicano. Se analiza la lógica que orienta esa iniciativa y se intenta aportar elementos para responder la siguiente pregunta: ¿es resiliente el sistema electoral mexicano?

### 1. El papel de las reformas político-electorales en el cambio político.

Para comprender el cambio político que vivió México a partir de la última década del siglo XX es fundamental entender el tipo de sistema político que se desarrolló a lo largo de ese siglo. La literatura coincide al caracterizar a ese sistema como autoritario, con una relevante dosis de control político y una base social fuertemente corporativizada (Linz, 1975. Sartori, 1980. Rouquié, 1982). Quizá la imagen más precisa de esas características la dibujó don Daniel Cosío Villegas (1972), cuando afirmó que las dos piezas fundamentales del sistema político mexicano eran: una presidencia muy poderosa y un partido político dominante.

Años después de esa brillante caracterización y a partir de los desarrollos de la investigación comparada, me permití hacer dos precisiones a tal descripción. Primero, el sistema de gobierno presidencial y el sistema de partido estuvieron acompañados y articulados por y con un sistema electoral que inhibía la auténtica

---

\* Profesor Titular del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, BUAP.

competencia por el poder político<sup>1</sup>. Segundo, siguiendo a Sartori (1980), propuse sustituir la figura del partido dominante, por la de partido hegemónico-pragmático (Valdés Zurita, 1993).

El presidencialismo mexicano se afianzó en las facultades constitucionales que tiene a disposición la persona que ocupa el poder Ejecutivo en el país y en las llamadas facultades metaconstitucionales, que durante largo tiempo tuvo a su disposición (Carpizo, 1979). La jefatura del partido en el poder y el control sobre sus bancadas legislativas, permitían al presidente mexicano gobernar sin contrapesos. En ese esquema, la no reelección inmediata de los legisladores fue un ingrediente relevante; pues su futuro dependía de las decisiones presidenciales y partidarias y no de su desempeño legislativo (Nacif, 2001).

Por su lado, el partido hegemónico que incluyó en sus bases sociales a grandes contingentes de obreros, campesinos y sectores populares (Garrido, 1982) se enfrentaba en las contiendas electorales a adversarios sumamente débiles.

Finalmente, el sistema electoral estaba controlado por la Secretaría de Gobernación (y las respectivas instancias de los gobiernos locales) a través de la Comisión Federal Electoral. Órgano en el que concurrían todos los partidos, pero estaba dominada por el gobierno y su partido. Además, su estructura desconcentrada, en las entidades y en los distritos electorales, estaba conformada por personas identificadas con las estructuras de poder del propio partido gubernamental (Valdés y Piekarewicz, 1990).

Ese sistema político empezó a hacer crisis en la elección presidencial de 1976. Como era su costumbre, dos de los tres partidos de oposición decidieron llevar al candidato del partido hegemónico como propio; a través de la figura de candidatura común, que estaba contemplada por la legislación y no obligaba a la conformación de algún tipo de alianza entre los partidos que postulaba a un mismo candidato. Sólo se requería la aceptación explícita de esa persona. El tercer partido opositor, que durante algún tiempo se había afianzado como la segunda fuerza electoral en

---

<sup>1</sup> Años después aprendí que Nohlen sostiene que: “sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos engloba en verdad los elementos substanciales que conforman un sistema político, su estructura y su dinámica” (1996, 21).

el país, cayó en una profunda crisis que le impidió postular candidato presidencial. Se llevó a cabo entonces la elección “ideal” del sistema hegemónico: el candidato del partido en el poder no podía perder, pues no estaba postulado ningún adversario que le pudiera ganar.

Esa elección abrió el camino de las reformas político electorales que, poco a poco, fueron aportando elementos de transformación al sistema político mexicano en su conjunto. Por supuesto que se trató de un proceso complejo en el que intervinieron un sinnúmero de elementos. Se ha enfatizado el papel que jugó la negociación entre las élites políticas para avanzar hacia la constitución de un sistema democrático (Woldenberg, 2012). Pero también se ha puesto énfasis en el cambio en las preferencias políticas de los ciudadanos, que fueron fortaleciendo la presencia electoral de las oposiciones (Merino, 2003). Ambos ingredientes, sin duda, estuvieron presentes.

Lo cierto es que en 1988 el partido en el poder sufrió una fractura y empezó su ruta de pérdida de la antigua hegemonía. En esa elección presidencial la lucha por el poder político se agudizó y el sistema electoral hizo crisis. La ruptura se produjo por la insistencia de una corriente política que postulaba un programa de vuelta al nacionalismo revolucionario y a la mayor intervención del Estado en la economía y, además, exigía la realización de un proceso interno democrático para la selección del candidato presidencial. Tras no haber sido satisfechas sus aspiraciones, ese grupo decidió abandonar las filas del partido gubernamental y postuló una candidatura presidencial competitiva, en alianza con dos de los viejos partidos de oposición y otro par de oposiciones que habían conseguido su registro luego de la reforma que se produjo después de la elección de 1976.

En 1986, dos años antes de la elección presidencial, se promulgó una reforma político electoral que agregó elementos a la crisis que se produjo dos años después. En primer lugar, ante la inclusión de nuevos partidos legalmente reconocidos, el gobierno y su partido decidieron cambiar la conformación de la Comisión Federal Electoral, para darle mayoría automática a ese partido. Esa dinámica fue uno de los ingredientes que propició que toda la oposición se uniera en el intento de impulsar decisiones que propiciaran la imparcialidad del órgano y la certeza del resultado

electoral. Otro elemento, fue la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. Se incrementó el número de diputaciones electas por representación proporcional, de 100 a 200. Pero además, se estableció que bajo cierto escenario de resultado electoral, su distribución igualaría la proporción de curules del partido más votado a su proporción de votos obtenidos. Por lo que, entonces, la proporción de representación de las oposiciones, en conjunto, también sería equivalente a su proporción de votación.

En ese entonces, a pesar de que se había creado un Tribunal de lo Contencioso Electoral, la calificación de las elecciones empezaba en la Comisión Federal Electoral, que entregaba las constancias de mayoría y hacia la asignación de las diputaciones de representación proporcional, y culminaba en las cámaras, que aplicaban el viejo principio de auto calificación política de cada elección de senadores y diputados. Además, una vez integrada la Cámara de Diputados se erigía en Colegio Electoral de la elección Presidencial.

El conflicto poselectoral empezó la misma noche de la jornada electoral, por la aparente “caída” de un sistema de recepción de resultados de los cómputos en las casillas, propuesto por las oposiciones y aceptado de mala gana por el gobierno y su partido. Pero se agudizó en las semanas posteriores con la entrega de las constancias de mayoría a los presuntos diputados, pues las oposiciones decidieron revisar acta por acta de casillas de votación, con el objeto de eliminar aquellas que pudieran mostrar evidentes signos de alteración o fraude. Su objetivo era evitar que el partido hasta entonces hegemónico tuviera mayoría en la Cámara de Diputados y entonces declarar nula la elección presidencial y convocar a una extraordinaria. Ese objetivo no se alcanzó, pero la agudeza del debate trascendió y se generó la percepción social de la existencia de un gran fraude electoral a favor del candidato presidencial del partido gubernamental (Valdés, 1988).

Esa crisis política tuvo diversas consecuencias. Por un lado, se debió realizar una nueva reforma político electoral que modificó aspectos fundamentales del anterior sistema electoral. En ese marco, tres fueron los aspectos más relevantes. En primer lugar, la desaparición de la Comisión Federal Electoral y su sustitución por el Instituto Federal Electoral (IFE); el cual, entre otras cuestiones, quedó facultado

para integrar un servicio profesional electoral encargado de la organización y ejecución de los procesos electorales con profesionalismo e imparcialidad. En segundo lugar, la creación de un nuevo padrón electoral y la emisión de una nueva credencial para votar. Todo ello, a partir de un procedimiento técnico vigilado en todas sus etapas por las representaciones de los partidos políticos. En tercer lugar, se dotó a los partidos de prerrogativas que con el tiempo se fueron incrementando y terminaron por otorgarles condiciones de mayor competitividad.

Esa reforma y las que le sucedieron establecieron las bases para que el sistema hegemónico fuese quedando atrás y se le pudiera sustituir por otro plural y competitivo.

## 2. Las lógicas de las reformas.

Si se estudia el conjunto de reformas políticas y electorales que se han realizado se puede desentrañar las lógicas sistémicas que se ha seguido. Desde que se promulgó la Constitución de 1917 se han llevado a cabo 21 reformas político electorales (Valdés Zurita, 2021). Evidentemente, han sido procesos políticos complejos en los que muy diversos actores han impulsado sus propuestas y en la negociación han logrado que algunas se aprueben y otras no. Los partidos políticos, o más precisamente sus dirigencias, los gobiernos y los órganos legislativos han sido esos actores. Por cierto, también ha habido cierta incidencia de la opinión pública, de organizaciones de la sociedad civil y de algunos especialistas en las diversas temáticas.

La revisión precisa de cada reforma, de las propuestas y de lo aprobado, permite hacer un balance del éxito o fracaso de cada uno de los actores involucrados. Pero eso implica un análisis de los árboles y no del bosque. Con la noción de lógica sistémica, lo que propongo es un análisis del amplio y abigarrado conjunto de procesos y normas que se han transformado a lo largo del tiempo. Además, resulta importante reconocer que el contexto en el cual se negoció, aprobó y aplicó cada reforma incide sobre esa lógica sistémica.

Observando la perspectiva amplia se puede afirmar que dos elementos han estado presentes a lo largo de todas las reformas electorales. Por un lado, resulta evidente que muchas propuestas y algunos resultados de las negociaciones se centran en la preocupación por controlar los procesos electorales y sus resultados. Esta tendencia fue dominante durante la etapa del sistema hegemónico y luego de su superación ha seguido presente, aunque con nuevos contenidos. Por otro lado, también es evidente que en el conjunto de propuestas y acuerdos ha estado presente la preocupación por legitimar a los procesos electorales y a sus resultados. Esta tendencia no fue dominante durante la etapa hegemónica, pero ha tenido mejores resultados en las reformas más recientes. Se puede afirmar que el control y la legitimidad han sido tesis y antítesis que en algún momento histórico se resolvieron en una síntesis.

El control de los procesos y de sus resultados, durante la época de la hegemonía, tuvo dos pilares fundamentales: el sistema de calificación política de los resultados electorales, que antes referí; y el de organización de los procesos, controlado por una instancia gubernamental como la Comisión Federal Electoral. El polo legitimador tuvo algunos logros en esa etapa, que no modificaron sustancialmente la conformación ni el funcionamiento del sistema en su conjunto. Entre otros, se puede ubicar en esa tendencia a: el voto activo y pasivo para las mujeres, de 1953; la creación de los diputados de partido, de 1963; el registro de nuevos partidos condicionado el resultado de las elecciones y las diputaciones plurinominales de 1977.

La lógica de férreo control de las elecciones hizo crisis con la elección presidencial de 1988 y los avances del polo legitimador no fueron suficientes para que su resultado fuese creíble para el conjunto de la sociedad. Por ese motivo la reforma de 1989 empezó a construir la síntesis de la vieja contradicción entre control y legitimidad. La creación del Instituto Federal Electoral, con su Servicio Profesional Electoral, fue el primer paso para la conformación de un nuevo modelo de control de los procesos electorales. La síntesis de la contradicción se alcanzó con la reforma de 1996. Entonces el secretario de Gobernación se retiró de la presidencia del Consejo General del IFE y éste quedó dotado de plena autonomía. Además, se

incorporó el Tribunal Electoral al poder Judicial, se le dotó de la facultad plena de calificar las elecciones y desaparecieron los Colegios Electorales. El control de los procesos electorales dejó de ser gubernamental y político, para pasar a ser profesional y jurisdiccional. Esa reforma además incluyó nuevos avances en el polo legitimados. Se dotó a los partidos de un generoso financiamiento público y se avanzó en la elección directa de las autoridades políticas de la capital del país, entre otros elementos. Este polo tuvo un muy relevante avance en la reforma de 2007; cuando se dotó a los partidos de acceso gratuito y equitativo a la radio y la televisión antes y durante las campañas electorales.

Desde entonces la tendencia legitimadora ha sido dominante. Los avances en el reconocimiento de los derechos de las y los ciudadanos han sido sistemáticos en cada una de las reformas electorales que se llevaron a cabo hasta 2014. El polo del control también ha avanzado. Sobre todo, en esa reforma que transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral y creó un sistema nacional de organización y control de todos los procesos electorales.

La solución de la contradicción entre control y legitimidad de la época hegemónica no significa que el sistema electoral no requiera de nuevos ajustes y reformas. Lo que implica es que esas adecuaciones se pueden hacer a partir de una nueva óptica incluyente y no autoritaria. En la hegemonía y en la democracia las preocupaciones por el control y la legitimidad han estado presentes en la mente de las personas que forman parte de los diversos actores de las reformas político electorales. Se expresan y exponen en sus discursos y propuestas. A veces mezcladas y otras claramente diferenciadas.

### 3. Los resultados del proceso de cambio político.

Se puede discutir mucho respecto de cuándo empezó y/o terminó la transición democrática en México. Incluso se puede sostener que aún no comienza o bien que no ha terminado. Lo cierto es que independientemente de ese debate, se puede reconocer que los tres elementos constitutivos del sistema político se han transformado. La presidencia perdió algunas de sus facultades constitucionales y

todas las metaconstitucionales (Salazar Ugarte, 2017). El sistema de partidos hegemónico fue sustituido por otro plural y competitivo (Valdés Zurita, 2004). Además, el sistema electoral se ha transformado radicalmente (Valdés Zurita, 2021).

Esa nueva arquitectura sistémica no sólo ha propiciado la alternancia en todos los niveles del poder político, sino que también ha fomentado nuevos términos de relación entre los diversos componentes del sistema político. Ahora las y los ciudadanos tiene más derechos políticos y existen nuevos espacios en los que pueden exigirlos y ejercerlos.

#### 4. Los ataques autoritarios al sistema electoral.

No obstante, lo anterior persiste cierto pensamiento autoritario que, al parecer, desea volver a los términos de relación previos al cambio democrático. Lamentablemente sus manifestaciones han acompañado la carrera política de la persona que desde 2018 ocupa la presidencia de la República. Su incumplimiento con los requisitos para ser Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en 2000, su desacato a un mandato judicial, en 2005, su no reconocimiento de la derrota electoral en 2006 y en 2012, han sido marco en el que se han expresado sus ataques al sistema electoral. Esos ataques, sin embargo, no ha sido solo individuales han creado toda una corriente de opinión entre sus correligionarios y simpatizantes. Un interesante estudio muestra como el partidismo impacta las opiniones de las personas, a pesar de que no exista evidencia empírica que prueben los hechos que sustentan esas opiniones (Castro Cornejo, 2019).

Desde antes, pero muy significativamente desde que esa corriente de opinión llegó al poder se postula que nuestra democracia es la más cara del mundo y que los órganos que conforman el sistema electoral son sumamente costosos. Ambas afirmaciones son, por lo menos, debatibles. El “costo” de nuestra democracia está conformado por cuatro elementos centrales: 1. El financiamiento público para los partidos y candidatos. 2. La elaboración y actualización del padrón electoral, junto con la expedición del único documento de identificación que tenemos las y los

ciudadanos; que además es gratuito. 3. La organización y ejecución de los procesos electorales y de participación ciudadana. 4. El contencioso electoral.

Cada uno de esos elementos está normado y se debe ejecutar con objetividad y profesionalismo. Por supuesto, implican costos que deben ser cubiertos por el presupuesto que el Estado les otorga a las autoridades electorales. Se ha reconocido a nivel internacional que este modelo de sistema electoral es eficiente y cuenta con gran prestigio entre los especialistas que realizan análisis comparados. Por supuesto que no es el mejor del mundo, pero tampoco es cierto que sea el más caro. La mayoría de los organismos de administración electoral no son responsables de proveer de recursos a los partidos y candidatos; ni de fiscalizar el uso que se hace de ellos. Tampoco tienen la responsabilidad de elaborar los documentos de identificación de los ciudadanos, ni el padrón electoral. Además, las impugnaciones se resuelven en los tribunales regulares y no existen instancias especializadas para otorgar de certeza a los resultados electorales. O sea, que de las cuatro funciones centrales que resuelve nuestro sistema electoral, los de otros países se concentran solamente en una: organizar y ejecutar los procesos electorales. Por ese motivo, la comparación internacional en materia de costos es, por decir lo menos, falaz.

Ahora bien, si se considera el costo de nuestra democracia en el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación, tampoco parece ser muy oneroso. El gasto público aprobado por la Cámara de Diputados, para 2022, es de: \$7,088,250,300,000.00 (Siete billones, ochenta y ocho mil, dos cientos cincuenta millones, tres cientos mil pesos) Para financiar ese presupuesto, se reconoció y autorizó un déficit fiscal de: \$875,570,500,000.00 (Ochocientos setenta y cinco mil, quinientos setenta millones, quinientos mil pesos). El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que tendrá durante el año la hacienda pública y el Presupuesto de Egresos; o sea, son los recursos que deberá obtener el gobierno vía préstamos para poder financiar su gasto. En el mismo presupuesto, se asignaron al INE: \$19,736,593,972.00 (Diez y nueve mil, setecientos noventa y tres millones, quinientos noventa y tres, novecientos setenta y dos pesos). Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le asignaron: \$2,797,138,000.00 (Dos mil setecientos noventa y siete millones, ciento treinta y ocho mil pesos). O sea que el

presupuesto total para nuestra democracia este año, ascendió a: \$22,533,731,972.00 (Veintidós mil, quinientos treinta y tres millones, setecientos treinta y un mil, novecientos setenta y dos pesos). Esto significa que el costo de nuestra democracia equivale al 0.32 por ciento del total del presupuesto federal. Si se suprimiera, aliviaría solo el 2.57 por ciento del déficit fiscal del año.

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2022	
A. Total	\$7,088,250,300,000.00
B. Déficit fiscal	\$875,570,500,000.00
C. Instituto Nacional Electoral	\$19,736,593,972.00
D. Tribunal Electoral del Poder Judicial	\$2,797,138,000.00
E. Suma	\$22,533,731,972.00
E / A en porcentaje	0.32%
E / B en porcentaje	2.57%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 2021.

A pesar de que esos datos son irrefutables, la presidencia de la República presentó, el 28 de abril pasado, ante la Cámara de Diputados un proyecto de reforma político electoral, presuntamente dirigido a disminuir los costos de nuestro sistema electoral. Aquí un fragmento de la exposición de motivos:

“Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato.

Además, un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación que han cobrado sus procesos electorales, supuestamente

justificados por su complejidad. En 1999 se asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un presupuesto de 68,300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 409% en menos de 20 años.

...

La presente iniciativa propone iniciar una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido. De igual forma, se propone fortalecer al TEPJF.

El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y las leyes.

...

En conclusión, al hacer al INEC una instancia única y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y a los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejaría de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales.

...

Además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país.” (López Obrador, 2022, 9-13).

Vale la pena subrayar dos cuestiones contenidas en esta exposición de motivos. En primer lugar, el artero ataque a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Evidentemente, al presidente y a su partido no les gustó que tanto el INE como el TEPJF determinaran que él y muchos funcionarios públicos y dirigentes partidistas, violaron la legislación al intervenir en la promoción de la revocación de mandato de 2022. Incluso hubo un fallido intento en la Cámara de Diputados para “legalizar” esas evidentes violaciones. En segundo lugar, está la muy tramposa comparación del presupuesto asignado al IFE en 1999 y al INE en 2018. Ese ejercicio deja de lado son cuestiones que hacen inviable tal comparación. 1999 no fue año electoral, mientras que 2018 sí lo fue. No se requiere conocimiento especializado para saber que los costos de operación de la autoridad electoral son muy diferentes en año electoral y en año no electoral. Además, entre 1999 y 2018 se realizaron dos reformas político electorales, en 2007 y 2014, que incrementaron las facultades y responsabilidades del IFE/INE. Por supuesto que esos argumentos, para el presidente, no tienen ninguna importancia. Su objetivo era demostrar que el sistema electoral es muy caro y por tal motivo es necesario demolerlo y construir uno alternativo.

La propuesta del presidente, que modifica radicalmente nuestro sistema electoral, pretende que el Consejo General del INEC sea integrado por medio de voto popular sobre personas propuestas por la presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el apartado A de la fracción V, de la propuesta de reforma al artículo 41 de la Constitución, se propone que cada poder entregue una lista de veinte candidatos para ocupar las siete posiciones de consejeras y consejeros electorales, que conformarán el Consejo General de INAC. Las tres listas deberán ser paritarias; o sea, conformadas por 10 mujeres y 10 hombres. La persona titular de la presidencia de la República entregará su lista, sin realizar ninguna consulta para su elaboración. Cada una de las cámaras del Congreso entregará una lista de 10 candidatas y candidatos (se presume que 5 mujeres y 5 hombres). Estas listas deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión plenaria de cada una de las cámaras. La Corte también entregará su lista paritaria de candidatas y

candidatos y, en este caso, la aprobación se debe dar por el voto de ocho de los once miembros del Pleno.

Según la propuesta, a partir de las tres listas el INEC organizará el proceso electoral. Las y los candidatos tendrán derecho a acceder a los tiempos oficiales en la radio y la televisión, en términos igualitarios y participarán en foros de debate organizados por el INEC. Los partidos políticos tendrán prohibido realizar actos de proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Luego de realizado el cómputo de la votación, será consejera o consejero presidente la persona que haya obtenido el mayor número de votos. El cargo se ocupará por seis años y no habrá reelección. La integración del Consejo General se realizará en agosto del año anterior al de la elección presidencial.

Además de que el procedimiento propuesto implica varios pasos atrás del que está vigente, resulta evidente se trataría de un intento para que los electos sean las personas propuestas por la presidencia de la República. Serían, sin duda, las más conocidas y es altamente posible que resultasen como las más votadas. Además, se dejaría atrás la renovación escalonada de los órganos electorales; a la que se arribó por la reforma del 2007, a partir de la convicción de que resulta prudente conservar la experiencia acumulada en el órgano colegiado, con la incorporación sistemática de nuevas experiencias e ideas. El modelo propuesto apunta hacia una situación en la cual el presidente en turno tendría un Consejo General integrado a modo, por personas que, además, desarrollarían su primera experiencia organizando un proceso electoral presidencial: el del sucesor del presidente en funciones.

## 5. ¿Es resiliente el sistema electoral mexicano?

El concepto de resiliencia se acuñó a partir de la literatura preocupada por la erosión de la democracia, que se ha percibido en diversos países durante los últimos años. Esa erosión ha sido caracterizada de diversas maneras: como recesión democrática (Diamond, 2015); como colapso y regresión (Tomini y Wagemann, 2018); como autocratización (Lührmann y Lindberg, 2019); o bien como retroceso (Waldner y

Lust, 2018). En México, Del Tronco y Monsiváis-Carrillo han caracterizado a ese proceso como erosión democrática (2020).

En algunas democracias, consolidadas o no, uno de los primeros síntomas de la erosión democrática es el reforzamiento del poder Ejecutivo. En los regímenes presidenciales, se observa que los presidentes tienden a controlar la competencia por el poder político, a obstaculizar el funcionamiento de las instancias autónomas y a limitar los mecanismos de rendición de cuentas (Bermeo, 2016).

Se ha observado, por otro lado, que en algunas situaciones se ha logrado interrumpir y/o atenuar la autocratización a partir de cierta resiliencia democrática (Lührmann, 2021). Las fuentes de resiliencia se han ubicado en la capacidad institucional de los poderes Legislativo y Judicial para contener la concentración de poder en el Ejecutivo; en la historia política de cada país; en la institucionalización de los partidos políticos; en las reglas formales para la lucha por el poder y en su aplicación; en el contexto económico y, en sentido amplio, en la socialización cívica de amplios segmentos de la población (Boese et al. 2021; Merkel y Lührmann 2021). La reforma del sistema electoral, propuesta por López Obrador, se alinea con el polo de control que fue predominante la mayor parte del siglo pasado. Pero al presentarse en una situación en la cual la democratización, por lo menos en materia electoral, ha avanzado también se puede ubicar como un claro retroceso democrático. La resiliencia del sistema electoral depende de la capacidad del Congreso de la Unión para evitar que se apruebe esa reforma electoral. Morena y sus aliados no cuentan con los votos necesarios para alcanzar los dos tercios en ambas cámaras. Su única oportunidad reside en conseguir que algunos diputados y diputadas (y senadoras y senadores) de las bancadas de oposición decidan acompañar la propuesta; ya sea votando a favor o ausentándose de la votación. Ante ese panorama, quedarían como recursos alternativos: recordar la historia de nuestra transición democrática; la institucionalización de los partidos de oposición y la capacidad de movilización de sectores de la población que se han socializado en el reconocimiento de la importancia de nuestra institucionalidad democrática.

Si algo de lo anterior funciona, es posible que la resiliencia de nuestro sistema electoral detenga, por lo menos por lo pronto, la autocratización que está en marcha.

## Referencias:

Bermeo, Nancy (2016): "On Democratic Backsliding". *Journal of Democracy* 27 (1): 5–19.

Boese, Vanessa, Amanda Edgell, Sebastian Hellmeier, Seraphine Maerz, y Staffan Lindberg (2021) "How Democracies Prevail: Democratic Resilience as a Two-Stage Process". *Democratization* 28 (5): 885–907

Carpizo, Jorge (1979): *El presidencialismo mexicano*. México: Siglo XXI Editores.

Cosío Villegas, Daniel (1972): *El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio*. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz.

Castro Cornejo, Rodrigo (2019): "¿Quién cree en el "fraude" electoral de 2006? Rumores políticos, percepciones erróneas y el razonamiento motivado en México", en Nexos consultado en línea (<https://datos.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/fraude.jpg>)

Del Tronco, José, y Alejandro Monsiváis-Carrillo (2020): "La erosión de la democracia". *Revista de Estudios Sociales*, núm. 74: 2–11.

Diamond, Larry (2015): "Facing Up to the Democratic Recession". *Journal of Democracy* 26 (1): 141–55.

Garrido, Luis Javier (1982): *El partido de la revolución institucionalizada*. México: Siglo XXI Editores.

Linz, Juan (1975): "Totalitarian and authoritarian regimes", en Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby, *Handbook of Political Science. Macropolitical Theory*. Reading: Addison-Wesley.

López Obrador, Andrés (2022): "Iniciativa del Ejecutivo federal", en *Gaceta Parlamentaria*, Número 6012-IX. México: Cámara de Diputados.

Lührmann, Anna. 2021. "Disrupting the Autocratization Sequence: Towards Democratic Resilience". *Democratization* 28 (5): 1017–39.

Lührmann, Anna, y Staffan Lindberg (2019): "A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New about It?" *Democratization* 26 (7): 1095–1113.

Merino, Mauricio (2003): *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*. México: Fondo de Cultura Económica.

Merkel, Wolfgang, y Anna Lührmann (2021): "Resilience of Democracies: Responses to Illiberal and Authoritarian Challenges". *Democratization* 28 (5): 869–84

Nacif, Benito (2001): "La no reelección consecutiva y la persistencia del partido hegemónico en la Cámara de Diputados de México", en Francisco Gil Villegas y Rogelio Hernández Rodríguez, *Los legisladores ante las reformas políticas de México*. México: El Colegio de México.

Nohlen, Dieter (1996). "La trilogía: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos". En *III Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Julio de 1996. Memoria*. México: Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de Asesoría y Promoción Electoral.

Rouquié, Alain (1982): "El análisis de las elecciones no competitivas: control clientelista y situaciones autoritarias", en Guy Hermet, Alain Rouquié y Juan Linz, *¿Para qué sirven las elecciones?* México: Fondo de Cultura Económica.

Salazar Ugarte, Pedro (2017): *El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías*. México: Fondo de Cultura Económica.

Sartori, Giovanni (1980): *Partidos y sistemas de partidos*, vol 1. Madrid: Alianza.

Tomini, Luca, y Claudius Wagemann (2018): "Varieties of Contemporary Democratic Breakdown and Regression: A Comparative Analysis". *European Journal of Political Research* 57 (3): 687–716.

Valdés, Leonardo (1988): "El fin de un código efímero. Las elecciones de julio de 1988 y el Código Federal Electoral", en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, *Las elecciones federales de 1988 en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México (Colección Procesos Electorales, Número 4).

Valdés Zurita, Leonardo (1993): *Las consecuencias políticas de las reformas electorales en México, 1977-1991*. Tesis doctoral. México: El Colegio de México.

Valdés Zurita, Leonardo (2004): “El fin del sistema de partido hegemónico en México”, en *Revista Mexicana de Estudios Electorales* Número 3.

Valdés Zurita, Leonardo (2021): “Cien años de reformas políticas y electorales”, en Leonardo Valdés Zurita (Coordinador), *Cien años del sistema electoral mexicano: continuidad y cambio*. Toluca: Instituto Electoral del Estado de México.

Valdés, Leonardo y Mina Piekarewicz (1990): “La organización de las elecciones”, en Pablo González Casanova (coord.), *Segundo informe sobre la democracia: México 6 de julio de 1988*. México: Siglo XXI Editores.

Waldner, David, y Ellen Lust (2018): “Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding”. *Annual Review of Political Science* 21 (1): 93–113.

Woldenberg, José (2012): *Historia Mínima de La transición democrática en México*. México: El Colegio de México.